



REPÚBLICA H



SOFÍA
GARCÍA

#OPINIÓN

La historia no es nueva, pero sí cada vez más descarada. Desde hace más de 40 años, dicen los comuneros, han sido despojados poco a poco

ZIMAPÁN: SAQUEO CON PERMISO

En el corazón de Hidalgo, dos empresas mineras -Sago Import Export y Carrizal Mining- llevan años expandiéndose como si la tierra fuera suya. Ejidatarios de la comunidad indígena San Pedro-Venustiano Carranza los acusan de despojo, contaminación y violencia. Las mineras han tomado terrenos sin pagar un peso, ampliaron caminos sin permiso ni cunetas -lo que ha provocado erosión en tierras de cultivo- y han formado verdaderos cerros de jales tóxicos que se esparcen con el viento. Todo con la complicidad silenciosa de autoridades estatales.

La historia no es nueva, pero sí cada vez más descarada. Desde hace más de 40 años, dicen los comuneros, han sido

despojados poco a poco. Primero fueron dos metros para el paso de camiones; después, otros once. El colmo fue la supuesta mesa de diálogo organizada por la Secretaría de Gobernación de Hidalgo, en la que las empresas ni siquiera se presentaron. Los únicos que acudieron fueron los ejidatarios, como si la cita fuera una burla institucional más. Mientras tanto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ya había clausurado parcialmente a Sago por un derrame de jales, pero el daño ambiental ya está hecho.

Además, los habitantes denuncian agresiones por parte de trabajadores ligados a las mineras cada vez que exigen lo que por derecho les corresponde. Temen por su seguridad, pero se niegan a guardar silencio. Hoy organizan una asamblea comunitaria para decidir cómo enfrentar lo que parece un despojo con rostro empresarial y respaldo político. No hay que perder de vista un detalle: Sago Import Export surgió de una sociedad entre el empresario Julio Sánchez y la exalcaldesa priista de Zimapán, Rosalía Gómez Martínez. El saqueo tiene nombre, apellido y padrínazgo.

LA MESA DEL SENADO CON MIRAS A 2027. Las negociaciones están a todo lo que da. La presidencia de la Mesa Directiva del Senado no sólo es una posición, es una vitrina. Y este año, Morena evalúa a cuatro mujeres para ocuparla. Al menos dos de ellas ya piensan en 2027. Andrea Chávez, senadora por Chihuahua, ha dejado claro que su prioridad es competir por la gubernatura de su estado.

Ana Lilia Rivera, por su parte, ya presidió el Senado y no descarta repetir, mientras busca reacomodarse para pelear de nuevo por Tlaxcala.

Completan la baraja Verónica Camino Farjat por Yucatán e Imelda Castro por Sinaloa, también con

aspiraciones de peso. El liderazgo del Senado será este año trampolín -o el obstáculo- para quienes no planean quedarse seis años más en su curul.

EN CORTO: CONSEJEROS EN LLAMAS. Desde los pasillos del INE cuentan que algunos consejeros, a meses de concluir su encargo, decidieron salir por la puerta trasera... pero no sin antes incendiar el salón. Saben que ya no tienen nada que perder y, con esa certeza, optan por dinamitar el proceso que ellos mismos ayudaron a diseñar, responsabilizando al Instituto -al que aún pertenecen- por errores cometidos en los órganos locales.

Mientras la mayoría del Consejo General intenta sostener la legalidad en la elección de ministros, magistrados y jueces, los que ya se van prefieren sembrar dudas sobre lo que antes votaron, denuncian lo que antes validaron y se desmarcan justo cuando hay que asumir costos. La narrativa es clara: dejar un ruido que los sobreviva y evitar que el desastre ajeno los salpique en su salida.

Lo malo es el daño interno ocasionado. Porque no se trata sólo de la demora -provocada por expedientes incompletos enviados desde otras instancias- sino de la desconfianza que se siembra desde las propias sillas del Consejo General. Dentro de sus facultades, el INE ha hecho su parte: revisar, corregir, garantizar legalidad. Lo que no puede -ni debe- hacer es convalidar atajos disfrazados de exigencias técnicas, me dicen.

Nos vemos a las 8 por el 8

@SOFIAGARCIA MX